



REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
SALAS DE JUSTICIA
SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS

RESOLUCIÓN No. 1578

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Expediente No.	9001111-02.2021.0.00.0001
Solicitante:	María Mercedes Inírida Rincón
Identificación:	C.C. 69.696.696
Calidad:	Agente de Estado No Integrante de la Fuerza Pública.
Situación jurídica:	<ul style="list-style-type: none">- Condenada por los punibles de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.- Investigada por el delito de homicidio agravado.- En libertad.
Asunto:	Asunción de conocimiento

I. ASUNTO POR RESOLVER

1. En irrestricta observancia de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 1922 de 2018 y, en consonancia con lo previsto por el Acuerdo AOG 020 del 22 de abril del 2020, emanado del Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz procede este Despacho de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz a pronunciarse sobre la asunción de conocimiento del sometimiento de **María Mercedes Inírida Rincón**.

II. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITANTE

2. Se trata de **María Mercedes Inírida Rincón**, identificada con la cédula de ciudadanía 69.696.696 de Villavicencio – Meta. De profesión abogada, quien actualmente se encuentra en situación de libertad y reside en la ciudad de Villavicencio, en la Calle 27 No. 45- 245.

III. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

3.1. Trámite al interior de la Jurisdicción Penal Ordinaria.

3. De acuerdo con la información que obra en la Solución de Automatización Judicial, adelante SAJ, la señora **Inírida Rincón** ha sido condenada dentro de las siguientes causas penales:

Radicado No. 110016000017-2012-12345-00.

4. El Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Villavicencio – Meta, en sentencia del 02 de agosto de 2016 condenó a **María Mercedes Inírida Rincón** a la pena principal de doce años de prisión, al hallarla penalmente responsable del delito de concierto para delinquir agravado, previsto en los incisos 2° y 3° del artículo 340 del Código Penal. Esto, en atención a los hechos ocurridos en el municipio de Puerto Concordia – Meta, entre los años 1998 y 2004, cuando la procesada desempeñó los roles de secretaria de movilidad y alcaldesa municipal y, desde esa posición, colaboró y financió al grupo paramilitar Bloque Héroes del Ariari - BHA de las Autodefensas Desagregadas de Colombia.

Radicado No. 503133104001-2012-34422-00.

5. El Juzgado 1° Penal del Circuito de Granada – Meta, en sentencia del 14 de febrero de 2017 condenó a la señora **María Mercedes Inírida Rincón** a la pena principal de diez años de prisión en calidad de autora de los punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, según lo dispuesto en los artículos 410 y 397 del Código Penal, respectivamente.

6. En esta oportunidad, la condena se fundamentó en los hechos acaecidos en el municipio de Puerto Concordia entre los años 2002 y 2003, cuando la entonces alcaldesa **Inírida Rincón** llevó a cabo el proceso licitatorio y la adjudicación del contrato estatal 003-23 con el objeto de realizar la “construcción de muros de contención en el margen este del Río Ariari para el control de inundaciones”. Según la autoridad penal, la aquí peticionaria, durante ese trámite contractual incurrió en varias irregularidades que, a la postre, llevaron a un detrimento patrimonial por \$110.000.000 y a la no ejecución adecuada de la obra.

7. Aunado a lo expuesto, la señora **Inírida Rincón** también está siendo investigada por el siguiente proceso, en el cual, la fiscalía delegada calificó el mérito del sumario con resolución de acusación:

Radicado No. 504506000193-2008-00409.

8. A través de la Resolución del 11 de mayo del 2008, la Fiscalía 30 delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado calificó el mérito del sumario tramitado en contra de **María Mercedes Inírida Rincón** con resolución de acusación en calidad de autora en la modalidad de determinadora del punible de homicidio agravado descrito en el artículo 104 inciso primero, numerales 2° y 7° del Código Penal.

9. Esto, a raíz de los hechos ocurridos en el municipio de Puerto Concordia el 14 de julio de 2003, cuando hombres del Bloque Héroes del Ariari de las Autodefensas Desagregadas de Colombia presuntamente asesinaron al líder indígena del pueblo Jijau Nemonte Chivaraquiva por órdenes de la alcaldesa de ese entonces, la señora **Inírida Rincón**.

IV. DE LA SOLICITUD DE SOMETIMIENTO PRESENTADA

10. El 26 de octubre de 2020, **María Mercedes Inírida Rincón** radicó, en calidad de Agente del Estado No Integrante de la Fuerza Pública una solicitud de sometimiento voluntario por los tres procesos penales previamente referenciados, a saber: 110016000017-2012-12345-00, 503133104001-2012-34422-00 y NUIC 002-07.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Asunción de conocimiento.

11. Conforme lo dispuesto en los artículos transitorios 16 y 17 del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2017; los artículos 62, 63, 65 y 84 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 28, 29, 30 y 44 de la Ley 1820 de 2016, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas está facultada para dar trámite a las solicitudes de sometimiento elevadas por personas que esgrimen la calidad de Agentes del Estado No Integrantes de la Fuerza Pública (AENIFPU) ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

12. Según el inciso 2° del artículo 48 de la Ley 1922 de 2018, corresponde a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas asumir el conocimiento de la presente actuación y vincular al trámite a los sujetos procesales e intervinientes especiales de forzosa citación. Por tal motivo, y en consonancia con la sentencia interpretativa SENIT 1 del 3 de abril de 2019, para lograr dicha vinculación, la providencia que asuma

conocimiento deberá ser notificada personalmente a los interesados, a las víctimas determinadas y localizadas, a sus apoderados y al señor agente del Ministerio Público a efectos de que se pronuncien sobre la petición de sometimiento y el inicio de la actuación dentro del término de traslado correspondiente¹.

13. En ese entendimiento, a términos de lo previsto por el artículo 48 de la Ley 1922 de 2018, es del caso proceder a avocar conocimiento del trámite correspondiente, con la advertencia de que el evento involucra una conducta punible en la que incurriera **María Mercedes Inírida Rincón** cuando ostentaba la calidad de Agente del Estado No Integrante de la Fuerza Pública, concretamente en los roles de secretaria de movilidad y alcaldesa.

14. En ese sentido, es importante aclararle a la solicitante que la presente decisión no implica su ingreso a esta Jurisdicción ni el otorgamiento de beneficios transicionales, puesto que todo ello será objeto de análisis luego de recaudado el material probatorio correspondiente.

5.2. Régimen de condicionalidad.

15. Los distintos mecanismos y medidas del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición están interconectados, por lo tanto, para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de la justicia, los comparecientes deben cumplir con el *régimen de condicionalidad* o condicionalidades del sistema, que corresponden a los deberes encaminados a la satisfacción de los derechos de las víctimas y cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la JEP.²

16. Resulta claro que, para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de justicia, es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. De lo anterior, surge el deber de la compareciente de contribuir individual³ o colectivamente⁴ al esclarecimiento de la verdad, esto significa, relatar

¹ Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, sentencia interpretativa SENIT 1 del 3 de abril de 2019, párr. 99 y ss.

² Artículo 1 del Acto Legislativo 01 del 2017.

³“(iv) La dimensión individual del derecho a la verdad implica que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad sobre los hechos, los responsables y las consecuencias de lo sucedido. Este derecho apareja, por tanto, el derecho a conocer la autoría del crimen, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos, y finalmente, el patrón criminal que marca la comisión de los hechos criminales. Esto último, implica el derecho a conocer si el delito que se investiga constituye una grave violación a los derechos humanos, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad” en Corte Constitucional, Sentencia C-579 del 2013, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 28 de agosto del 2013.

⁴“(v) La dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte, significa que la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de

de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades. Por otra parte, surge la obligación de cumplir con las reparaciones que les sean impuestas a la compareciente, y atender todos los requerimientos de los órganos del SIVJNR.⁵

17. Dado lo anterior, cabe advertir que cualquier incumplimiento de los compromisos bien sea porque no se hagan aportes significativos que superen el umbral de verdad, porque se aporte de manera dolosa información falsa, o porque se rehúsen a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz, conllevaría a la pérdida del tratamiento especial de justicia transicional.⁶

17. Por esta razón, se ordenará a la señora **Inírida Rincón** que, en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente decisión allegue el acta de sometimiento correspondiente, el formato para la aportación de información a la matriz de datos sobre la verdad de los autores y conductas relacionadas con el conflicto armado colombiano (F-1) y el compromiso claro, concreto y programado (CCCP), en el cual expresará los aportes a la verdad que tiene por hacer y las medidas de reparación con las víctimas, en los términos que se exponen a continuación.

- *Del compromiso claro, concreto y programado.*

18. Sobre el CCCP, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ha señalado que *“todas las personas que comparecen ante la JEP o pretenden hacerlo contraen el deber de presentar un programa claro y concreto de contribuciones a la justicia transicional”*⁷, lo que se traduce en un programa de dignificación de las víctimas en sus dimensiones individual y colectiva, justicia efectiva y garantía de verdad plena, reparación efectiva y no repetición.

19. Y, adelante expuso que este CCCP, debe entenderse como una forma de preparar la justicia restaurativa venidera, que propende no sólo por la reparación adecuada del daño y la dignificación de las víctimas, sino también por el ofrecimiento de

contar con una *memoria pública* sobre los resultados de estas investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos.” en Corte Constitucional, Sentencia C-579 del 2013, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 28 de agosto del 2013.

⁵ Inciso 8 del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 del 2017; artículos 6, 14, 33, 50 y 52.4 de la Ley 1820 del 2016; Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Apelación autos TP-SA 019,020 y 021 de 2018.

⁶ Artículo 5 del Acto Legislativo 01 del 2017.

⁷ Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Apelación TP-SA-SENIT 01 del 2019, 3 de abril del 2019, párr. 302.

oportunidades de rehabilitación al victimario, el tránsito hacia una situación de paz más estable y la evitación de la repetición.⁸

20. Ese programa de participación en la justicia transicional demanda de una mínima relación de condiciones de tiempo (cuándo), modo (cómo o con qué medios de prueba o mecanismos de revelación de la verdad), lugar (dónde), en las que se surtirán las contribuciones materiales efectivas a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición⁹, siendo forzoso en este estadio procesal requerir a la señora **María Mercedes Inírida Rincón** a fin de que presente un CCCP, que cumpla, al menos, con los siguientes requisitos:

- a. Manifestar de manera clara y concreta la identificación de los hechos sobre los cuales aportará relatos veraces.
- b. Manifestar como sus relatos coadyuvarán a esclarecer conductas realizadas como parte del conflicto armado;
- c. Manifestar en qué clase de programas de reparación inmaterial e integral puede participar para resarcir a las víctimas, y concretamente aquellas que permitan reintegrar los derechos afectados y la superación de la situación social que enfrentan por causa de la victimización.
- d. Señalar de manera clara, qué tipo de colaboración puede extender a los demás órganos y componentes del SIVJRN.
- e. Manifestar cuáles serán sus aportes efectivos a la no repetición, entre otros puntos que considere relevantes para su contribución a la verdad plena.
- f. Hacer una relación de las condiciones de tiempo, modo y lugar respecto de las contribuciones materiales efectivas a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición y sobretodo de los medios de prueba o mecanismos de revelación de la verdad.
- g. Expresar con claridad el compromiso para contribuir con la satisfacción de los derechos de las víctimas.

⁸ Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Senit 1 de 3 de abril de 2019. Párr. 174

⁹ Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 19 de 2018.

- h. Manifestar expresamente el compromiso de atender los requerimientos de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como suministrar sus datos de notificación e informar todo cambio de residencia y no salir del país sin autorización previa y a quedar a disposición de la JEP para el cumplimiento de sus funciones.

5.3.Otras determinaciones.

21. Finalmente, atendiendo a los hechos expuestos por la peticionaria en su solicitud, y a lo evidenciado en las decisiones judiciales por ella aportadas, este Despacho ordenará al Grupo de Análisis de Información (GRAI) que, en el término de veinte (20) días hábiles, elabore un análisis de contexto donde identifique la situación del municipio de Puerto Concordia en el marco de la consolidación del Bloque Llanero de las FARC-EP y la posterior creación y accionar del Bloque Héroes del Ariari (1997-2005); además, de identificar el impacto las confrontaciones armadas de la época sobre la comunidad étnica Jijau.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, este Despacho en movilidad a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas,

RESUELVE

PRIMERO: ASUMIR conocimiento del trámite promovido ante la Jurisdicción Especial para la Paz por la señora **María Mercedes Inírida Rincón**, identificada con la cédula de ciudadanía 69.696.696 de Villavicencio – Meta, en su condición de Agente de Estado No Integrante de la Fuerza Pública.

SEGUNDO: REQUERIR a la señora **María Mercedes Inírida Rincón**, para que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación de esta decisión, presente su **compromiso claro, concreto y programado** de aportaciones a la justicia transicional, en cumplimiento del régimen de condicionalidad asumido ante del SIVJRNR.

TERCERO: REQUERIR a la señora **María Mercedes Inírida Rincón**, para que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación de esta decisión y, en coordinación con la Secretaría Judicial, suscriba el *formato para la aportación de información a la matriz de datos sobre la verdad de los autores y conductas relacionadas con*

el conflicto armado colombiano (F1), en cumplimiento del régimen de condicionalidad asumido ante el SIVJNR.

CUARTO: REQUERIR a la señora **María Mercedes Inírida Rincón**, para que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación de esta decisión y, en coordinación con la Secretaría Judicial, suscriba y allegue el acta de compromiso correspondiente.

QUINTO: ADVERTIR a la señora **María Mercedes Inírida Rincón** que la presente decisión no implica su ingreso a esta Jurisdicción ni el otorgamiento de beneficios, puesto que todo ello será objeto de análisis luego de recaudado el material probatorio correspondiente y que el incumplimiento de las obligaciones adquiridas con la Jurisdicción Especial para la Paz o la desatención de los requerimientos de las Salas o Secciones de la JEP, tendrá las consecuencias previstas en el parágrafo segundo del artículo 52 de la Ley 1820 de 2016 y el parágrafo 1º del artículo 20 de Ley 1957 de 2019.

SEXTO: Por Secretaría Judicial, **REQUIÉRASE** a la señora **María Mercedes Inírida Rincón**, para que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación de esta resolución, informe a este Despacho si cuenta o no con apoderado judicial. Para el efecto, deberá aportar el poder correspondiente e indicar su nombre completo y dirección de contacto. En caso contrario la Secretaría Judicial, sin que medie previa orden del despacho, deberá oficiar Sistema Autónomo de Aesoría y Defensa (SAAD) para que asigne un defensor de oficio en esta causa.

SÉPTIMO: ORDENAR al **Grupo de Análisis de Información (GRAI)** que, en el término de veinte (20) días hábiles, elabore un análisis de contexto donde identifique la situación del municipio de Puerto Concordia en el marco de la consolidación del Bloque Llanero de las FARC-EP y la posterior creación y accionar del Bloque Héroes del Ariari (1997-2005); además de identificar el impacto las confrontaciones armadas de la época sobre la comunidad étnica Jijau.

OCTAVO: A través de Secretaría Judicial, **COMINICAR** la presente decisión a la señora **María Mercedes Inírida Rincón**, a su representante judicial y al delegado del Ministerio Público asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz, para que ejerza la representación de los intereses de las víctimas indeterminadas y colectivas, en los términos del inciso 2º del artículo 48 de la Ley 1922 de 2018.

NOVENO: A través de Secretaría Judicial, **REQUERIR** a la Subdirección de Gestión Documental, para que, en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir del levantamiento de la suspensión de términos conforme a lo previsto por el Acuerdo

AOG 014 de 13 de abril de 2020, emanado del Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz y sus prórrogas, con irrestricta observancia de sus lineamientos, digitalice en el expediente SAJ toda la información que repose a nombre de la señora **María Mercedes Inírida Rincón**.

DÉCIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición por parte de las víctimas o su representante, en los términos del artículo 12 y del inciso 2º del artículo 48 de la Ley 1922 de 2018.

Todo lo anterior, a través de la Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y, en los precisos términos del el Acuerdo AOG No. 014 de 13 de abril de 2020 modificado por los Acuerdos AOG No. 026 de 18 de mayo de 2020 y AOG No. 029 de 23 de junio de 2020.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS

JEP